

REVISTA DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

AÑO XXXII — ABRIL-JUNIO DE 1964 — Nº 128

DIRECTOR: ORLANDO TAPIA SUAREZ

CONSEJO CONSULTIVO:

MANUEL SANHUEZA CRUZ
HUMBERTO TORRES RAMIREZ
JUAN BIANCHI BIANCHI
QUINTILIANO MONSALVE JARA
MARIO CERDA MEDINA
LUIS HERRERA REYES

IMPRENTA UNIVERSIDAD DE CONCEPCION — (CHILE)

ROBERTO BOZA SALINAS

**Abogado y Ayudante del Seminario
de Derecho Público de la
Universidad de Concepción.**

LA INDEMNIZACION AL ABSUELTO Y AL SOBRESEIDO DEFINITIVAMENTE

La Constitución de 1925 incorporó entre sus disposiciones un precepto, el artículo 20, novedoso y avanzado. Este artículo, que contiene la idea de legislar en beneficio de las personas en cuyo favor se dictare sentencia absolutoria o se sobreseyere definitivamente por los perjuicios efectivos o morales que hubieren sufrido injustamente, aún no recibe aplicación por no haberse dictado la ley correspondiente, probablemente por temor de que las innumerables críticas con que fuera recibido este precepto constitucional se conviertan en realidad al aplicarse en la práctica.

* * *

En la sesión celebrada por la Subcomisión de Reformas Constitucionales el 8 de junio de 1925, el señor Nolasco Cárdenas, Presidente en aquel tiempo del Partido Demócrata, expresó que "era conveniente establecer la responsabilidad del Estado y de los particulares en caso de detención indebida". Y añadía el señor Cárdenas: "Es preciso considerar la situación de aquellos individuos expuestos a llegar a la cárcel por los delitos sociales. Por una huelga, por un discurso inconveniente o por cualquier otro motivo insignificante, esos ciudadanos van a veces a la cárcel y se les tiene allí largo tiempo, mientras se instruye el sumario, para decirles al fin que son inocentes y dejarlos en libertad. Igual cosa sucede en algunos juicios criminales por delitos comunes. Entretanto los reos y sus hogares han tenido que sufrir, sin razón, perjuicios graves que nadie indemniza" (1).

(1) Actas Oficiales de las sesiones celebradas por la Comisión y Subcomisiones encargadas del estudio del Proyecto de Nueva Constitución Política de la República. Imprenta Universitaria, Santiago, 1925. Página 249.

El señor Cárdenas materializó sus observaciones en la siguiente moción, que figuraba en la primera prueba del Proyecto de Reforma de la Constitución de 1833, como el artículo 22: "Todo individuo en favor de quien se sobreseyere definitivamente, tendrá derecho a indemnización de los particulares o del Estado por los perjuicios efectivos o meramente morales que hubiere sufrido injustamente" (2).

A raíz de la indicación del señor Cárdenas, se produjo en el seno de la Subcomisión un debate que, dado su alto interés, nos permitimos reproducir:

"El señor Silva Cortés hace presente que la disposición del artículo 22 puede dar margen a responsabilidades que impliquen excesivos gravámenes para el Estado".

"El señor Montenegro está de acuerdo con el señor Silva Cortés".

"El señor Silva Cortés dice que acaso fuera preferible establecer la responsabilidad del funcionario judicial en los casos de perjuicios sufridos injustamente por algún particular".

"El señor Maza, Ministro de Justicia, cree que para evitar el peligro que se señala, podría redactarse esta disposición en forma de establecer que el perjudicado tendrá derecho a indemnización en la forma que determine la ley". Así quedó acordado (3).

En consecuencia, la moción del señor Cárdenas quedó convertida en el actual artículo 20 de nuestra Constitución Política, cuyo texto es el siguiente: "Todo individuo en favor de quien se dictare sentencia absolutoria o se sobreseyere definitivamente, tendrá derecho a indemnización, en la forma que determine la ley, por los perjuicios efectivos o meramente morales que hubiere sufrido injustamente".

El sobreseimiento definitivo es una resolución del juez de la causa en virtud de la cual se termina el procedimiento judicial en lo criminal. El sobreseimiento definitivo tiene autoridad de cosa juzgada (4).

* * *

La Constitución hace mención no sólo a los perjuicios materiales sino aún a los morales. Se plantea aquí el problema relativo a si los perjuicios morales son o no indemnizables.

(2) Actas Oficiales: Obra citada. Página 540.

(3) Actas Oficiales: Obra citada. Páginas 339 y 340.

(4) Código de Procedimiento Penal: Artículos 406 y 418.

"Parece indiscutible que en nuestra legislación hay disposiciones que autorizan la indemnización del daño moral. Por de pronto, el artículo 2.314 del Código Civil que dice "que todo el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro..."; el artículo no distingue qué clase de daño y donde la ley no distingue no puede el hombre distinguir. En seguida, el artículo 2.329 del mismo Código, que manifiesta que en general "todo daño" que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta. Habla en general, dice "todo daño", expresión que no puede ser más amplia".

. "También el Código Penal contiene una serie de disposiciones que se refieren, aunque indirectamente, al daño moral: el artículo 370 que contempla los delitos de violación, estupro o raptó, establece que a la víctima se debe dar a título de dote una indemnización, pena que también está fundada en el daño moral que se ha causado".

"Sin embargo, algunos consideran, no obstante estas argumentaciones, que nuestro legislador no acepta la indemnización del daño moral. Y se basan en el artículo 2.331 del Código Civil, que manifiesta que "las imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de una persona no dan derecho para demandar una indemnización pecuniaria, a menos de probarse daño emergente o lucro cesante, que pueda apreciarse en dinero"; y agrega el artículo: "pero ni aún entonces tendrá lugar la indemnización pecuniaria si se probare la verdad de la imputación". Entonces argumentan: Esta disposición indica que el legislador sólo trata de indemnizar el daño patrimonial. Pero puede contestarse a esta argumentación diciendo que este artículo es de carácter excepcional, que viene a hacer excepción al principio tan general de los artículos 2.314 y 2.329 del Código Civil, según los cuales debe indemnizarse todo daño" (5).

La Ley de Imprenta, más conocida como Ley sobre Abusos de Publicidad, ha contemplado en forma expresa la indemnización del daño moral, al decir: "La indemnización de perjuicios prove-

(5) Alessandri R., A. y Somarriva U., M.: "Curso de Derecho Civil", Editorial Nascimento, Tomo IV, Redacción de A. Vodanovic, Santiago, 1941, Páginas 878 y 879.

niente de los delitos de injuria, difamación o calumnia causados por alguno de los medios señalados en esta ley, podrá hacerse extensiva al daño pecuniario que sea consecuencia de la depresión moral sufrida con motivo de la injuria, difamación o calumnia por la víctima, su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos y aún a la reparación del daño meramente moral que sufiere el ofendido" (6).

* * *

Y nuestra jurisprudencia ¿qué ha dicho respecto a la indemnización del daño moral?

En un principio hubo cierta vacilación; se aceptaba en ciertos casos y en otros se denegaba. En los últimos años, la jurisprudencia se ha uniformado definitivamente en el sentido de aceptar la indemnización por daño moral.

Nuestra Corte Suprema, en una sentencia en que acepta la indemnización por daño moral, sentó la siguiente doctrina: "Es indemnizable el daño moral ya que la ley sin distinguir, ordena indemnizar todo daño. Sólo proceden las indemnizaciones procedentes del daño siempre que exista perjuicio, menoscabo, disminución o pérdida material o moral; y así el Diccionario de la Real Academia equipara el daño moral o detrimento, o sea, destrucción o mengua, en este caso de la honra o fama" (7).

Existen diversas otras sentencias en las cuales también se acepta la procedencia de la indemnización por daño moral (8); habiendo encontrado una en sentido contrario (9).

* * *

De la discusión habida en el seno de la Subcomisión de Reformas Constitucionales, se infiere que la indemnización, por los perjuicios efectivos o meramente morales que hubiere sufrido injustamente un individuo, será de cargo del Estado. En efecto, durante la discusión del actual artículo 20 de la Constitución, se hizo ver

-
- (6) Artículo 35 del Decreto Ley Nº 425, con las modificaciones introducidas por la Ley 15.476, publicada en el "Diario Oficial" de fecha 23 de enero de 1964.
(7) Revista de Derecho y Jurisprudencia: Tomo XXXII, Sección 1ª, Página 419.
(8) Revista de Derecho y Jurisprudencia: Tomo XXI, Sección 1ª, Páginas 1.053 y 529; Tomo XXIV, Sección 1ª, Página 567; Tomo XXIV, Sección 1ª, Página 141; Tomo XXXI, Sección 1ª, Página 144.
(9) Revista de Derecho y Jurisprudencia: Tomo XXIX, Sección 1ª, Página 43.

que esta disposición sería gravosa para el Fisco, no faltando quien propusiera su supresión. El Presidente Alessandri reconoció lo fuerte del precepto y estimó que mucha gente votaría en contra del Proyecto de Reforma Constitucional por existir esta disposición, agregando que éste no era más que un principio doctrinario que no tendría aplicación mientras no se dictare la ley respectiva y que la indemnización debería pagarla la persona que ella estableciere. Y el autor de la indicación, el señor Nolasco Cárdenas, recordó que al lanzarse esta idea, se dijo que si la justicia cometía un error en perjuicio del procesado, el Estado debía indemnizarlo. "Así es que, concluyó, si llega a dictarse la ley, se establecerá también en ella ese procedimiento" (10). Y así también lo ha dicho nuestra jurisprudencia.

La Corte de Apelaciones de Valdivia, en sentencia dictada con fecha 8 de agosto de 1928, sentó la siguiente doctrina: "La indemnización a que tiene derecho el reo absuelto es de cuenta del Estado y no afecta al denunciante del delito". Este fallo en su considerando 7º dice: "Que siendo la Administración de Justicia una función inherente al Estado, y establecida en beneficio común de los ciudadanos, es lógico que la indemnización debería ser de cuenta del Estado, salvo el caso en que, a consecuencia de la denuncia o querella, se hubiere cometido por los ciudadanos un delito, caso en el cual la indemnización debería ser de cuenta de éstos" (11).

Por otra parte, en diversas oportunidades, nuestros tribunales han dicho que la indemnización a que se refiere el artículo 20 de nuestra Constitución es improcedente por no haberse dictado la ley que regule la indemnización (12). En el mismo sentido se ha pronunciado la Contraloría General de la República (13).

* * *

La disposición que preocupa nuestra atención fue recibida, desde que se conoció el Proyecto de Reforma Constitucional, con duras críticas.

(10) Actas Oficiales: Obra citada. Páginas 485 y 486.

(11) Gaceta de los Tribunales: Año 1931. Tomo I. Página 510.

(12) Gaceta de los Tribunales: Año 1940. Tomo I. Página 271; Año 1941. Tomo II. Página 164.

(13) Contraloría General de la República: Oficios Nº 43.750 de 1939 y Nº 32.785 de 1945.

Un comentarista, después de reconocer que el precepto establecía un principio de justicia, encontraba que pecaba por defecto y por exceso, y añadía: "No es el sobreseimiento la única manera de terminar un proceso reconociendo la inocencia del inculpado y, por lo tanto, la injusticia de su prisión así como no todos los sobreseimientos proceden en el caso de tal inocencia e injusticia de la prisión". "Así bajo el primer aspecto: el juez de primera instancia encarga reo a un individuo y la Corte revoca este auto y decreta su inmediata libertad: ha estado injustamente preso el inocente y no se ha sobreseído a su respecto, pero queda libre de toda molestia futura".

"Y bajo el segundo aspecto: se sobresee porque se establece que el procesado estaba loco al cometer el delito o está loco al ser juzgado; porque se ha decretado una amnistía, o se ha favorecido al reo con un indulto, porque ha prescrito la acción penal, etc. En estos casos no ha habido injusticia en la prisión, y sin embargo se sobresee. Y no parece justo pagar una indemnización".

"Sería, por consiguiente, mejor decir: "Todo individuo que haya estado sometido a proceso y cuya inocencia sea reconocida por una resolución ejecutoriada, etc."

"Por otra parte, sería bueno decir quién paga la indemnización".

"¿Será el Estado? Pero si fue por culpa de un juez parece justo que la pague el juez, como en el caso de una detención que haya terminado por un recurso de amparo. Y si ha sido por culpa de un particular, de un querellante particular, por ejemplo, lo justo es que él pague la indemnización. Así como se pena con prisión al querellante calumnioso, es justo penarlo también con esta indemnización" (14).

Guerra, después de reconocer que esta disposición es teóricamente justa, cree que su aplicación práctica puede llegar a convertirse "en la más nefasta injusticia, cuando criminales expertísimos para substraerse a sanciones penales después de ser absueltos tan sólo por falta de pruebas suficientes, lleguen a obtener una indemnización que en vez de ser reparadora importe un verdadero premio por acciones dignas de castigo" (15).

(14) Santiago Lazo: "Observaciones al Proyecto Constitucional" (Inédito). Boletín del Seminario de Derecho Público de la Universidad de Chile. 1.º semestre de 1940. Santiago. Página 64.

(15) José Guillermo Guerra: "La Constitución de 1925". Santiago, 1929. Páginas 156 y 157.

Nuestro Código de Procedimiento Penal ha dispuesto que el que ejercita la acción penal pública está obligado a afianzar las resultas del juicio y añade, en otra de sus disposiciones, que uno de los requisitos indispensables de toda querrela criminal es el ofrecimiento de la fianza de calumnia y, explicando el objeto de la fianza de calumnias, dice que el fiador de calumnias se obliga a responder por las penas pecuniarias a que pueda ser condenado el querellante y por el pago de costas e indemnización de perjuicios irrogados al querrellado, en el caso de que la querrela resulte calumniosa, no pudiendo el juez dar curso a la querrela si no se cumpliera con la obligación de constituir fianza (16).

Y el Código Penal, en su artículo 211, sanciona con diversas penas, según se trate de crimen, simple delito o falta, a la acusación o denuncia que hubiere sido declarada calumniosa por sentencia ejecutoriada.

* * *

Con posterioridad a la dictación de la Constitución de 1925, algunas Constituciones europeas incorporaron entre sus preceptos disposiciones que guardan alguna similitud con el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental.

El artículo 1º de la Constitución griega, de 1927, dispuso que "una ley especial fijará las condiciones por las que el Estado indemniza a las personas injustamente encarceladas o condenadas" (17).

La Constitución portuguesa, de 1933, estipula "la posibilidad de revisión de las sentencias dictadas en juicios criminales, asegurándose el derecho de indemnización de daños y perjuicios por la Hacienda Nacional, al reo o a sus herederos, mediante el procedimiento que se regulará por una ley" (18).

La Constitución italiana, de 1947, en el artículo 24, inciso final, expresa que "La ley determinará las condiciones y las modalidades para la reparación de los errores judiciales" (19).

(16) Código de Procedimiento Penal: Artículos 22, 94 Nº 6, 98 inciso 2º y 99.

(17) "Las Nuevas Constituciones del Mundo". Editorial España. Madrid, 1931.

(18) Idem. cita anterior.

(19) "Leyes Constitucionales". Ediciones Taurus. Madrid, 1959. Páginas 123 y 428.

Por último, "La Convención Europea para la Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales", de fecha 4 de noviembre de 1950, después de asegurar las garantías concedidas a las personas en cuanto al arresto, dice en su artículo 5, Nº 5: "Toda persona víctima de un arresto o de una detención, en condiciones contrarias a las disposiciones de este artículo, tiene derecho a reparación" (20).

CONCLUSIONES

Estimamos que debe irse cuanto antes a la dictación de la ley que reglamente la indemnización de perjuicios a que se refiere el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, cumpliendo así el amplio significado social que ella encierra, y que se tuvo en vista al incorporar dicha disposición en nuestra Constitución, con lo cual se repararían muchas injusticias que se cometen, especialmente en modestos ciudadanos que carecen de los recursos necesarios para acogerse a la institución de la libertad bajo fianza.

Reconocemos que tales indemnizaciones podrían prestarse para abusos, pero pensamos que una ley bien meditada evitaría en gran parte, si no todos, los inconvenientes señalados por los críticos a este precepto constitucional.

(20) Idem.

JORGE MARIO QUINZIO F.

Ayudante de Derecho Constitucional en
la Escuela de Derecho de la
Universidad de Chile.

FUERO PARLAMENTARIO O INMUNIDAD PENAL

El objeto del fuero parlamentario o inmunidad penal es que los miembros del Parlamento estén a cubierto de cualquier proceso, de cualquiera detención por parte de la autoridad judicial o gubernativa, con motivo de algún acto que hayan realizado o se suponga que hayan realizado fuera de las Cámaras, salvo en el caso de delito flagrante.